

L-595-19

AYUNTAMIENTO DE MADRID

F
6589

INFORME RELATIVO

AL

VIGENTE CONTRATO CON LA COMPAÑÍA MADRILEÑA

DE ALUMBRADO Y CALEFACCIÓN POR GAS

EMITIDO

por el Letrado Consistorial D. Gregorio Campuzano

Caja 170



MADRID
IMPRENTA MUNICIPAL

1910

F-6589

Ayuntamiento de Madrid

F
6589

AYUNTAMIENTO DE MADRID

INFORME RELATIVO

AL

VIGENTE CONTRATO CON LA COMPAÑÍA MADRILEÑA

DE ALUMBRADO Y CALEFACCIÓN POR GAS

EMITIDO

por el Letrado Consistorial D. Gregorio Campuzano



MADRID
IMPRENTA MUNICIPAL
—
1910



R.2289

Á LA COMISIÓN ESPECIAL DE REFORMA DEL ALUMBRADO

Examinados por el infrascrito Letrado los antecedentes que se le han comunicado, relativos á la instalación del alumbrado por gas en esta Capital y á los contratos celebrados por el Excelentísimo Ayuntamiento en diferentes épocas, con las distintas personas y Compañías que han venido sucediéndose en las obligaciones derivadas de aquéllos, con los consiguientes derechos, para la prestación del expresado servicio público, emitió informe verbal ante esa Comisión acerca de las cuestiones legales que pudieran plantearse, ya sobre la rescisión, ya sobre la nulidad, ya sobre otros diversos extremos del contrato hoy vigente con la Compañía Madrileña de alumbrado y calefacción por gas, y en cumplimiento del acuerdo en aquel acto adoptado, hace el firmante un resumen escrito del dictamen que, con mayor extensión, formuló *in voce*, procurando concretarle, como se dispuso, en los más concisos términos; y sin omitir aquellos datos recogidos entre los incompletos que se le han suministrado y que puedan ser útiles en la actualidad.

Comenzó el Ayuntamiento de Madrid á ocuparse de la sustitución del antiguo alumbrado público de aceite, por el de gas, el año 1831, y con tal objeto acordó abrir un concurso, ofreciendo un premio de quince mil reales en metálico y una medalla de oro de cuatro onzas, al autor de la mejor Memoria y diseños que se presentaran para realizar aquel proyecto, y aunque el Jurado que se nombró para juzgarlas no consideró ninguna de ellas merecedora del premio ofrecido, llamó, sin embargo, la atención acerca de la señalada con el núm. 14, en la cual se hacían varias proposiciones que debían ser estudiadas, resultando ser autor de ella D. Manuel Pérez del Castillo. Como consecuencia de las conferencias que con éste celebró la Comisión que entendía del asunto, se sacó la adjudicación de las obras y servicio á pública subasta repetidas veces, quedando desierta, por no ajustarse los pliegos de los licitadores á las condiciones aprobadas, hasta que por fin se hizo la adju-

dicación á favor de D. José Viejo Medrano, por sí y en nombre de D. Ramón Cano y D. Faustino García, formalizándose la correspondiente escritura en 16 de Octubre de 1833, ante el Escribano D. Miguel Llama.

No conoce el informante el texto de esta escritura, que no ha visto, y por las referencias que de ella se hacen, se viene en conocimiento de que el Municipio se comprometió á contribuir á la construcción de la fábrica con la cantidad de seiscientos mil reales, de los que hubo de entregar, desde luego, doscientos mil al Sr. Viejo Medrano, y aun parece se obligó también el Ayuntamiento á proporcionarle el terreno en donde la fábrica había de ser edificada.

Ya antes de esto se había establecido el alumbrado por gas en el recinto del Real Palacio y en la plaza de Oriente y calle que desde ésta conduce á las Caballerizas, por cuenta del Real Patrimonio, que sostenía aquel servicio, pero que tan pronto como se adjudicó el de la Capital al Sr. Viejo Medrano, reclamó del Ayuntamiento, por Real orden de 31 de Diciembre del citado año 1833, que se le reintegrara de la cantidad de ciento treinta y dos mil reales, que decía le importaba anualmente á dicho Patrimonio el alumbrado de la plaza y calle mencionadas.

No se avino á esto D. José Viejo Medrano, que, al ser requerido para el pago de la expresada cantidad, se negó á satisfacerla, alegando no estar obligado á ello por la escritura de concesión; y con tal motivo, por Real orden de 30 de Enero de 1835, se declaró rescindido el contrato. A pesar de esta contrariedad, el Ayuntamiento no desistió de su proyecto, y celebró con el Sr. Viejo Medrano un nuevo contrato, formalizado por escritura pública otorgada ante el Escribano D. Eugenio del Castillo en 18 de Diciembre de 1838, ratificando la anterior de 1833 con algunas variaciones. Tampoco ha visto el informante dicha escritura de 1839, y por lo que resulta de los expedientes que se le han comunicado, parece se mantuvo en ella el compromiso contraído por la Municipalidad de contribuir con una subvención y facilitar el terreno para que se construyera la fábrica del gas.

No faltaron impugnadores de la reforma que se trataba de introducir en el alumbrado público, discutiéndose el alcance y valor de la Real orden de 30 de Enero de 1835, al efecto de invalidar el contrato celebrado con el Sr. Viejo Medrano,

cuestión esta que el Ayuntamiento resolvió en sentido negativo, por estimar que en todo caso había de considerarse subsistente por virtud de la escritura posterior de 1838. Y no sólo fueron razones de orden legal las que se expusieron para combatir el proyecto, sino también otras de carácter económico, siendo la principal de ellas, que se perjudicaría la riqueza agrícola del país por la disminución en el consumo de aceite, reparo que el Procurador Síndico recogió en su informe de 2 de Diciembre de 1845, en donde se lee «que ya había cuidado de evitar aquel inconveniente mediante la condición de que, durante doce ó quince años, se emplease en la producción del gas una cantidad de aceite igual á la que se venía consumiendo en el alumbrado», período de tiempo que el contratista quería reducir á diez años.

Se hicieron varias cesiones del contrato por autorizarlo así alguna de sus condiciones, figurando entre los sucesivos adquirentes de la concesión D. Pedro Gil Serra y D. Pedro Gil Rabot, quienes por escritura otorgada ante el Escribano Don Isidro Ortega Salomón en 11 de Febrero de 1846, transmitieron sus derechos á D. Guillermo Partington y D. Eduardo Oliver Mamby, no sin que antes uno de los Sres. Gil reclamara, como lo hizo luego el Sr. Partington, que se le señalase el terreno en donde había de construir la fábrica, anunciando que de no verificarlo así, se vería en el caso de exigir la correspondiente indemnización de daños y perjuicios.

El Excmo. Ayuntamiento atendió esta reclamación, y en 17 de Marzo del citado año 1846, acordó que por los Arquitectos municipales se procediese á designar el terreno propiedad de Madrid que considerasen más adecuado para instalar la fábrica; y aquellos funcionarios propusieron para tal objeto una tierra adquirida de D. Manuel Regidor, por escritura otorgada ante el Escribano D. Domingo Bande, con fecha 22 de Noviembre de 1839, en cuyo documento público se expresó que el referido inmueble tenía cinco fanegas, ocho celemines y diez y seis estadales de cabida, y estaba situado á la izquierda de la puerta de Toledo, en la inmediación de ésta, entre los caminos que guiaban al puente de ese nombre y á la puerta de Atocha.

De conformidad con lo propuesto por los Arquitectos, y en cumplimiento de otro acuerdo adoptado por la Corporación municipal en 12 de Mayo del supradicho año de 1846, se otor-

gó escritura en 29 del mismo mes, ante el Escribano D. Manuel María de Paz, por la que fué cedida á los Sres. Partington y Oliver Mamby la mencionada tierra, pero conservando Madrid la propiedad, y entendiéndose la cesión tan sólo por el tiempo que se estipulara en el contrato principal, con lo que se aludía á otro nuevo que se trataba ya de celebrar para el servicio de alumbrado.

El mismo año 1846, los Sres. Partington y Oliver constituyeron la « Sociedad Madrileña para el alumbrado de gas » en Madrid, y aportaron á la misma la concesión que de este servicio se hizo por el Ayuntamiento, continuando aquella Compañía anónima los trabajos de canalización, ya comenzados, para el tendido de las cañerías destinadas á conducir el fluido. También efectuó experimentos del nuevo alumbrado durante varios meses en el Salón del Prado, en la calle de este nombre y en la del Lobo, habiéndose realizado en 18 de Agosto de 1847 en las citadas vías públicas, y con resultado satisfactorio el ensayo oficial, que por cierto no fué el primero hecho en esta Corte, pues bastantes años antes, en 1830, cuando todavía no se había tratado de sustituir el antiguo alumbrado de aceite con motivo de un fausto suceso ocurrido en la Real familia, y como uno de tantos festejos para solemnizarle, se iluminaron provisionalmente con gas las calles de acceso á la Puerta del Sol.

Mientras tanto, y transmitida ya la concesión á la Sociedad Madrileña, mencionada, se venía gestionando y discutiendo en el Ayuntamiento la modificación del contrato, la cual se acordó en sesiones celebradas los días 20 de Junio y 18 de Agosto de 1848; y en 14 de Agosto de 1849 se otorgó la correspondiente escritura ante el Escribano D. Manuel María de Paz, entre el Excmo. Sr. Marqués de Santa Cruz, Alcalde Corregidor, y D. Luis María Pastor, al que equivocadamente se llama D. Manuel, en nombre de la Compañía, consignándose, entre otras, las condiciones siguientes:

1.^a Que la duración del contrato sería de veinticinco años contados desde aquella fecha.

4.^a Que el Ayuntamiento se obligaba á pagar á razón de siete maravedises por cada hora y luz, sin distinción de los dos tipos adoptados para ésta, cuyo precio podría ser rebajado de común acuerdo al principio de cada quinquenio, y esta rectificación, en caso de no haber avenencia, sería resuelta

por árbítrios componedores, y no constituiría motivo para desposeer á la Compañía del privilegio.

7.^a Que el Ayuntamiento no entregaría cantidad alguna á la Empresa para el establecimiento de fábrica, canalización ni de lo demás que haya de hacerse por cuenta de la Compañía, quedando sólo obligado al pago del gas que se le suministrara.

8.^a Que el Municipio cedía para el alumbrado por el gas, los faroles, enseres y locales que entonces estaban aplicados para el del aceite, y los útiles construídos para el ensayo verificado en 1830, todo previo inventario y tasación para ser devuelto al Ayuntamiento al terminar el contrato, ó en su defecto otros equivalentes.

16. Que la Empresa podría ceder, cambiar ó traspasar sus derechos, dando antes parte al Ayuntamiento, y siempre que éste se hallase conforme con las circunstancias de la Sociedad ó persona á quien se ceda.

20. Que el Ayuntamiento solicitaría de S. M., la confirmación del contrato y el derecho exclusivo de fabricación y venta del gas en esta Corte, durante los veinticinco años de su duración á favor de la Compañía contratante. (La confirmación á que esta cláusula se refiere, se había obtenido ya por medio de Real orden dictada antes de otorgarse la escritura).

21. Que si al final del contrato quisiera el Ayuntamiento hacer uso del derecho de reversión y tomar por su cuenta el servicio, lo debería poner en conocimiento de la Compañía con un año de anterioridad, y tasada la fábrica y sus accesorios por Peritos nombrados por ambas partes, la Empresa otorgaría escritura de venta á favor del Municipio, que, previo el pago, entraría en posesión de todo ello y de los derechos y acciones de la misma, pero que si el Ayuntamiento no quisiera encargarse del servicio y hubiere de arrendarse ó cederse el alumbrado, la Compañía Madrileña sería preferida en igualdad de circunstancias.

22. Que toda duda ó cuestión sobre la inteligencia y cumplimiento del contrato, se resolvería por medio de árbítrios ó amigables componedores, y, caso de discordia, por el Sr. Regente de la Audiencia Territorial ó la persona que este eligiera.

Por una adición se estableció que la Sociedad contratante, quedaba autorizada para la recaudación y cobranza del im-

puesto que pagan los propietarios de casas de Madrid por el alumbrado público, con la retribución del 2 por 100 de las cantidades corrientes que cobrara, y el 3 por 100 de los atrasos, aplicándose las sumas que en tal concepto recaudase al pago de lo que el Ayuntamiento debiera satisfacer por el alumbrado.

En tales términos quedó por entonces formalizado el contrato entre el Excmo. Ayuntamiento y la Sociedad Madrileña para el alumbrado de gas, la que por escritura otorgada el 29 de Septiembre de 1856, ante el Escribano D. Francisco Morcillo, cedió la fábrica con todos sus derechos á D. Gregorio López Mollinedo, quien á su vez por otra escritura otorgada en 31 de Octubre del mismo año, ante el Escribano D. Ildefonso de Salaya, los cedió á la Sociedad general de Crédito Mobiliario Español.

Posteriormente, en 1859 se promovió expediente sobre la falta de cumplimiento del contrato, iniciándose en 10 de Octubre de 1861 por el Crédito Mobiliario el pensamiento de un nuevo arreglo, que, conciliando todos los intereses enlazados con el negocio, lejos de imponer á Madrid sacrificio alguno, distribuyese sus gastos y proporcionara al vecindario el alumbrado más barato, si bien aseguraría á la Sociedad contratista la legítima compensación, propuesta que fué aceptada por la Corporación municipal en 12 de Diciembre siguiente, y en igual mes de 1862 aprobó las condiciones para la novación del contrato, que, con algunas modificaciones, fué sancionado por Real orden del Ministerio de la Gobernación dictada en 25 de Abril de 1864.

En 22 de Junio del mismo año se formalizó la novación del contrato por escritura pública otorgada ante el Notario D. José García Lastra por el Excmo. Sr. D. José Osorio y Silva, Duque de Sexto, Alcalde Corregidor de esta Corte, y por Don Ignacio de Olea y Arteaga y D. Ernesto Polanch y Joseph, Administradores de la Sociedad general de Crédito Mobiliario Español, estableciéndose entre otras, las condiciones siguientes:

1.^a Que el Ayuntamiento concedía á la expresada Compañía, subrogada en los derechos y acciones de la Sociedad Madrileña, á la que se había otorgado el privilegio exclusivo, entonces todavía subsistente, de fabricación y venta de gas en esta Capital, el derecho, también exclusivo, por cincuenta

años, contados desde el día siguiente al otorgamiento de la escritura, de conservar y establecer cañerías para la conducción del gas para el alumbrado y calefacción en todas las calles, plazas y paseos públicos existentes y que pudieran abrirse en esta Corte.

2.^a Que este derecho de establecer cañerías no autorizaba ni concedía más que el de la servidumbre (así se la llamó) del subsuelo de la vía pública, ocupado por los conductos durante el tiempo expresado anteriormente, y con sujeción á las disposiciones que se dicten al efecto por la Autoridad municipal ó por la Superior de la provincia.

3.^a Que desde el 14 de Agosto de 1874 en que terminaba el privilegio concedido en 1849 para la exclusiva fabricación y venta del gas, este derecho exclusivo quedaría reducido á sólo el suministro del indicado fluido por cañerías, siendo, portanto, libre su fabricación desde la referida fecha y su venta por cualquiera otro medio que no sea el de canalización otorgado á la Compañía.

4.^a Que el Ayuntamiento se reservaba el derecho de conceder permisos para canalizar en una extensión hasta de trescientos treinta y tres metros en cada caso, y sin indemnización alguna por este concepto á la Empresa, cuando se tratara de ensayos de alumbrado ó calefacción, por diferentes sistemas que pudieran inventarse ó introducirse durante el período del contrato.

9.^a Que serían de cuenta de la Empresa todos los gastos que se originasen en la fabricación y suministro del gas, y asimismo los de conservación de la fábrica ó fábricas y sus dependencias, todas las obras de ampliación, renovación ó de cualquiera otra clase, así como los de construcción de cualquiera fábrica más, si el servicio lo exigiese y conviniera á la Empresa levantarla, y los gastos de todas las tuberías y collares y su colocación en la vía pública, como también la recomposición de la parte de ésta que tuviera que levantar para ejecutar las obras de canalización.

11. Que por el derecho de servidumbre del subsuelo de la vía pública, la Compañía pagaría cuarenta mil reales al año, á contar desde el 14 de Agosto de 1874 en que terminaba la locación estipulada en 1819.

12. Que la Empresa continuaría estando exenta de los recargos municipales y demás que debieran percibir los fondos

del Ayuntamiento, sobre las materias precisas á la fabricación y purificación del gas.

13. Que si durante el curso del contrato las necesidades de Madrid exigiesen la construcción de otra ú otras fábricas más que la existente, la Compañía quedaba obligada á levantarlas en el sitio de su elección, con tal que fuese aprobado por la Autoridad municipal.

19. Que si durante el curso del contrato se hiciesen algunos nuevos adelantos ó mejoras en la fabricación del gas, la Empresa quedaba obligada á aceptarlas y conformarse con lo que por la Autoridad municipal se le ordenara, siempre que el nuevo procedimiento llevara de práctica por lo menos tres años en las circunstancias que allí se indican, ó después de un año de ensayos en Madrid, con resultados favorables y ventajosos.

21. Que en el caso de descubrirse ó inventarse un sistema de alumbrado diferente del de gas, el Ayuntamiento se reservaba el derecho de conceder la autorización necesaria para su establecimiento sin otorgar por ello indemnización alguna á la Empresa, á la que se reservó, sin embargo, el derecho de preferencia en igualdad de circunstancias, expresándose que el Ayuntamiento emplearía todo su poder (textual), para facilitar y asegurar una transacción equitativa entre ella y los dueños del privilegio.

36. Que el precio para el alumbrado público sería arreglado sobre el que á la sazón costaba el metro cúbico, que era por término medio un real sesenta y seis céntimos, bajando 8 por 100 al contado, consignándose otra serie de rebajas sucesivas hasta llegar al 37 por 100 en 1.º de Julio de 1887.

41. Que los faroles, candelabros y pescantes ó palomillas, los entregaría el Ayuntamiento á la Empresa, que los colocaría y pintaría según las instrucciones que recibiera de la Autoridad, con cargo lo último á los fondos municipales; y que la Compañía suministraría, por cuenta de estos fondos, las pipas, llaves y mecheros y todos los accesorios que constituyen en conjunto el aparato de iluminación por gas.

44. Que la Empresa conservaría en el mejor estado posible todo el material del alumbrado público por gas, y repararía inmediatamente á su costa todas las fugas ó escapes, y había de reemplazar y reparar todos los objetos que sufriesen deterioro.

45. Que la Sociedad sería responsable, fuera de los casos de fuerza mayor, de todos los desperfectos que ocurriesen en el material del alumbrado público por gas y en la canalización, así como de las sustracciones que pudieran cometerse.

48. Que el Ayuntamiento abonaría á la Empresa por cada aparato de iluminación diez céntimos de real, por luz y día, en concepto de gastos de entretenimiento, no pudiendo exigir la última ninguna otra cantidad por renovaciones, composturas ó reparaciones en el material.

60. Que el precio del gas vendido á los particulares por medida de volumen, sería reducido sobre el que entonces regía, que era el de dos reales setenta y siete céntimos el metro cúbico, en igual proporción y en las mismas épocas establecidas en la condición 36, para el alumbrado público.

61. Que el precio del gas vendido por luz y hora se fijaría sirviendo de base el establecido para el metro cúbico, y de acuerdo entre el consumidor y la Empresa, pudiendo imponer ésta hasta el 10 por 100 más del tipo fijado para los consumidores por contador.

65. Que si la Compañía cesare, por cualquier motivo, de suministrar el gas para el servicio público y particular durante el período del contrato, el Ayuntamiento se haría cargo inmediatamente de dichos servicios, disponiendo para ello de la fábrica, cañerías y de cuantos aparatos y utensilios le fueren anejos, declarándose la caducidad de la concesión y derechos que por ella pudiera tener la Empresa, y quedando ésta obligada á resarcir á la Municipalidad de los gastos que por la falta de cumplimiento del contrato se la originasen, y de los daños y perjuicios causados.

66. Que á la terminación del contrato el Ayuntamiento podría adquirir la propiedad, si así le conviniese, de todas las cañerías generales y las del alumbrado público, con sus accesorios de sifones, válvulas, etc., abonando á la Empresa únicamente el veinticinco por ciento del valor de las obras de canalización y del que representen los indicados objetos á la fecha de la adquisición, todo mediante un justo avalúo por peritos elegidos por ambas partes, y un tercero en caso de discordia nombrado por el Gobernador de la provincia, á menos que excediera de cinco millones de reales el expresado 25 por 100, en cuyo caso la adquisición de todo lo indicado se haría por la referida cantidad.

También se reservó al Ayuntamiento el derecho de adquirir por el 50 por 100 de su valor la fábrica ó fábricas que fueren propiedad de la Empresa, con todos los aparatos y útiles necesarios para la fabricación del gas.

69. Que las cantidades que el Ayuntamiento tuviera que satisfacer por las referidas adquisiciones se satisfarían en tres plazos: uno, al contado; otro, al cumplir el año, y el tercero, á los dos años, todo á contar desde la fecha que terminaba el contrato.

70. Que la Empresa podría ceder, cambiar ó traspasar sus derechos adquiridos por el contrato dando antes parte al Excelentísimo Ayuntamiento, y siempre que el mismo estuviera conforme con las circunstancias de la Sociedad ó personas á quien se hiciera la cesión y con los términos en que ésta se estipulara, y previa la aprobación del Gobierno.

71. Que para asegurar el cumplimiento del contrato la Empresa, hipotecaba especial y señaladamente la fábrica del gas, con todos los edificios, máquinas, aparatos y cuanto constituye el material de expropiación.

La condición 66, de que antes se ha hablado, establecía, además de lo ya dicho, que aun cuando el Ayuntamiento no hiciera uso del derecho de reversión allí reservado á su favor, terminaría con el contrato el de servidumbre que durante el mismo se concedía á la Empresa en el subsuelo de la vía pública, y caducarían igualmente todos los que se derivaban de las cláusulas de dicho contrato.

La expresada escritura de 22 de Junio de 1864, por la que se formalizó en las indicadas condiciones la novación del contrato para el alumbrado público, fué adicionada por otra otorgada ante el mismo Notario D. José García Lastra, en 2 de Julio de 1866, para rectificar un error material que impedía su inscripción en el Registro de la Propiedad, y consistía en haber asignado á la fábrica y sus dependencias una superficie de 488.000 pies en vez de 468.261 pies cuadrados.

La Sociedad general de Crédito Mobiliario Español cedió por aportación el contrato á la Compañía Madrileña de alumbrado y calefacción por gas, en escritura pública otorgada ante el Notario D. Segundo de Avendivar, según se refiere en el proyecto ó minuta de la que se formalizó para la novación efectuada en 1898, de que seguidamente se hablará, único antecedente que el infrascrito ha visto respecto á la indicada

cesión, desconociendo, por tanto, los trámites seguidos para efectuarla y si se realizó con la conformidad del Excelentísimo Ayuntamiento y la aprobación del Gobierno, como es de suponer se verificara, con arreglo á lo establecido en la condición 70 del contrato formalizado en 22 de Junio de 1864, que estaba en vigor.

Nada nuevo ocurrió hasta que, pasados bastantes años, la Compañía Madrileña de alumbrado y calefacción por gas, solicitó prórroga del contrato, y como le fuera denegada, presentó instancia de fecha 15 de Febrero de 1898, formulando proposiciones para la novación de aquél en términos beneficiosos, según decía, para el Ayuntamiento y para el público, consistentes en rebajas en el precio del flúido y en la supresión del impuesto de dos céntimos de peseta por metro cúbico que pagaban los particulares al Municipio, en cambio del cual abonaría la Empresa, anualmente, setenta y cinco mil pesetas. Estos beneficios los apreciaba la Compañía, por el tiempo restante del contrato, en 4.748.000 pesetas en favor del Ayuntamiento y en 10.852.960 en favor de los consumidores particulares.

En cambio de estas bonificaciones la Empresa solicitaba que el Ayuntamiento renunciase al derecho de reversión de la fábrica, canalizaciones, etc., que le concedía el contrato, pudiendo la Compañía disponer libremente de todo ello, como única propietaria á la terminación de aquél; pedía además que mientras continuase en la explotación de la industria había de poseer el llamado derecho de servidumbre que venía disfrutando, sin otro gravamen municipal que el canon de 10.000 pesetas anuales que satisfacía, y, era otra de las condiciones que el Ayuntamiento se comprometiera á no crear, ni exigir nuevos arbitrios, impuestos, ni recargos sobre el consumo del gas en todas sus aplicaciones, por lo que á la citada Compañía se refería, mientras continuara la misma en la explotación de la industria.

El Excmo. Sr. Alcalde Presidente, á fin de que pudiera apreciarse si la novación del contrato ofrecía ventajas y beneficios al Municipio, dispuso que se estudiara el asunto por los funcionarios técnicos de la Corporación, y ordenó que los señores Ingeniero Director de Vías públicas, Ingeniero Director de Fontanería Alcantarillas, Decano de los Arquitectos municipales y Jefe del Laboratorio químico

emitieran informe, como lo hicieron acerca de varios extremos, á saber:

a) *Valoración de la construcción de una fábrica de gas para producción de la cantidad de fluido que hoy produce la existente en Madrid.*—Los técnicos estimaron que el coste de una fábrica en tales condiciones ascendería á 2.868.895 pesetas y el de la canalización á 1.912.597, en total 4.781.492 pesetas.

b) *Valoración de la actual fábrica y de su precio probable á la fecha de la terminación del contrato vigente* (el de 1864) *con la Compañía del gas.*—Los Peritos tasaron el valor del terreno que ocupa la fábrica, propio de la Compañía y con la superficie de 44.112 metros cuadrados, á 10 pesetas cada uno, en 441.120 pesetas. Idem el de las tapias de cerramiento en 33.400. Idem el de los edificios y aparatos destinados exclusivamente á la fabricación del gas en 2.400.000 pesetas. En total 2.874.520 pesetas, advirtiendo que esta tasación, si así lo interesaba el Excmo. Ayuntamiento podía ser ampliada con mayores datos y más detenido estudio.

c) *Valoración de todas las canalizaciones existentes hoy y que puedan existir cuando finalice el aludido contrato.*—Le apreciaron los facultativos en 1.459.185 pesetas.

d) *Valor total que en diez y seis años representa la rebaja del precio del fluido para el alumbrado público propuesto por la Compañía.*—Se calcularon en 2.458.597 pesetas.

e) *Valor que representa la rebaja propuesta por la Compañía en el precio del alumbrado particular y en el del consumo de fluido en las industrias y calefacción.*—Se estimaron en 5.141.085 pesetas. Este informe de los técnicos fué emitido con fecha 13 de Abril de 1898.

En el expediente existen, además, tres instancias interesando del Excmo. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento que procurara lograr de la Compañía del gas la rebaja del precio del fluido. Una de esas instancias, de fecha 11 de Octubre de 1897, la suscriben industriales pertenecientes á diferentes gremios de esta Capital, que suplicaron al Excmo. señor Alcalde interpusiera su autoridad, cerca de la Compañía Madrileña para conseguir que introdujera economías en el precio del fluido, añadiendo: «Y si como se dice, del Excelentísimo Ayuntamiento dependiese el que estas llegasen á pronto y satisfactorio término, se sirva orillar las dificultades que

existan; pues, dado el beneficio que esto representa para la industria principalmente, y el interés que en ello tienen los que suscriben que á ella se dedican, no dudan obtendrá esta petición el amparo y la protección de V. E.». Otra de las instancias es de la Sociedad el Fomento de las Artes, y lleva fecha de 22 de Diciembre del mismo año, expresándose en ella que, estudiada por la referida Sociedad la consulta hecha á la misma por la Compañía Madrileña respecto á la baja del precio del gas, sobre la base de concesiones que el Ayuntamiento había de otorgarla, á cambio de los beneficios que ofrecía, se había creído conveniente por dicha Sociedad el Fomento de las Artes, dirigirse al Excmo. Sr. Alcalde en súplica de que se dignara prestar atención á la propuesta formulada por la Compañía, dado que con ello se estimaban favorecidos los intereses industriales de esta población, manifestando además que sin inmiscuirse en sí las pretensiones de la Compañía eran justas y equitativas, por ser esto de la incumbencia del Ayuntamiento, como quiera que de la base de arreglo se derivaban beneficios indiscutibles para la industria y el comercio, bajo este punto de vista se dirigían al Sr. Presidente de la Corporación Municipal, á fin de que á la brevedad posible resolviera el asunto.

Fué éste sometido á las Comisiones de Hacienda y Policía urbana reunidas, y en sesión de 6 de Mayo del citado año 1898 el Excmo. Ayuntamiento aprobó el pliego de condiciones para el nuevo contrato, el cual fué sancionado por la Junta Municipal en 14 del mismo mes y elevado con razonada exposición del Sr. Alcalde Presidente al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, dejando en absoluto á su libre facultad, según en aquélla textualmente se decía, la determinación que en cualquier sentido estimara conveniente para los intereses municipales. Y por Real orden que dictó aquel Centro ministerial con fecha 21 de dicho mes, se declaró que, examinados, en virtud de la alta inspección, los términos del convenio, eran éstos beneficiosos para el Ayuntamiento y vecindario de esta Corte, y que no siendo aplicable al caso la regla tercera del art. 85 de la ley Municipal, podía desde luego el Ayuntamiento proceder á su formalización.

Así se hizo por escritura pública otorgada ante el Notario D. José García de la Lastra, en 9 de Julio del expresado año 1898 con la Compañía Madrileña de alumbrado y calefac-

ción por gas, en cuyo documento fueron reproducidas las condiciones 2.^a, 4.^a, 9.^a, 13, 19, 41, 44, 45, 65, 70 y 71, ya mencionadas, del contrato celebrado en 1864 y se establecieron además, entre otras, las siguientes:

1.^a Que la Compañía tendrá la obligación de hacer el servicio de alumbrado público hasta el 21 de Junio de 1914, sin que esto constituya privilegio de ninguna clase respecto al alumbrado particular y demás usos, pudiendo para este objeto establecerse en Madrid cuantas fábricas de gas se soliciten, y las cañerías necesarias en el subsuelo de la vía pública mediante el canon que el Municipio determine.

3.^a Que desde la expresada fecha el Ayuntamiento quedará libre para adjudicar el servicio de alumbrado por cualquier clase de fluido á la empresa ó particular que tenga por conveniente.

En esta condición se consignó también literalmente lo que sigue: Sin embargo, á la terminación de este contrato y mientras la Compañía Madrileña continúe explotando su industria, poseerá el derecho de servidumbre del subsuelo que hoy disfruta sin otro gravamen municipal que el canon de diez mil pesetas á que le obliga la cláusula 11.^a

11.^a Que la Compañía pagará el expresado canon anual por el concepto ya indicado.

12.^a Que el Ayuntamiento no creará ni exigirá nuevos recargos ni gravámenes sobre el consumo del gas hasta 1914.

21.^a Que la Compañía quedaba obligada á prestar el servicio de alumbrado público por electricidad en las vías y calles allí expresadas.

36.^a Que el Ayuntamiento abonaría por el fluido la cantidad correspondiente, á razón de 22 céntimos de peseta el metro cúbico.

48.^a Que también abonará por cada aparato de iluminación 25 milésimas de peseta por luz y día en concepto de gastos de entretenimiento, sin que la Compañía pueda exigir ninguna otra cantidad por renovaciones, composturas ó reparaciones, y siendo de cuenta del Municipio el pago de los carbones en los aparatos de iluminación eléctrica.

60.^a Que el precio del gas para el alumbrado particular, sería el de 30 céntimos de peseta el metro cúbico, y el de 22 céntimos, para las industrias y calefacción.

61.^a Que el precio del gas vendido por luz y hora, se fijará

sirviendo de base el establecido para el metro cúbico, y de acuerdo entre el consumidor y la Compañía, pudiendo ésta imponer hasta el 10 por 100 más sobre el precio para los consumidores por contador.

66.^a Que á la terminación del contrato, la Compañía podrá disponer libremente de la fábrica, edificios, máquinas, aparatos, cañerías, y todo cuanto constituye el material propio de la fabricación y explotación, y mientras la Compañía actual continúe explotando su industria, poseerá también el derecho de servidumbre á que hacen referencia las cláusulas 2.^a y 3.^a

La misma condición dice «que los demás derechos que se derivan de este contrato, caducan con el mismo».

69.^a Que la Compañía se obliga á satisfacer al Ayuntamiento hasta la terminación del contrato, la cantidad de 75.000 pesetas anuales, en equivalencia del arbitrio municipal de 0'2 céntimos de peseta por metro cúbico, impuesto á los consumidores de gas para el alumbrado particular, sin que por esto pueda exigir nada la Compañía de sus abonados por compensación ú otra razón cualquiera; y que la expresada suma será ampliable en la cantidad correspondiente al 5 por 100 del importe del consumo, al precio de 30 céntimos de peseta fijado, siempre que este 5 por 100 exceda de la cifra de 75.000 pesetas.

Estas y las demás condiciones que antes se han señalado, son las más importantes de la novación del contrato con la Compañía Madrileña formalizada en la escritura de 9 de Julio de 1898, mereciendo notarse especialmente, como las más interesantes modificaciones introducidas, que se suprimió el privilegio concedido á dicha Compañía para la exclusiva del suministro del gas por medio de cañerías en las vías públicas; que se la otorgó el derecho de seguir ocupando el subsuelo de la vía pública con las cañerías para la conducción del gas mientras explote la industria y aun después de terminado el contrato, sin más gravamen que el canon anual de 10.000 pesetas; que la exención de recargos municipales y demás que deben percibir los fondos municipales sobre las materias precisas á la fabricación y purificación del gas, concedida por el contrato anterior, se modificó en el nuevo, estableciendo que el Ayuntamiento no creará, ni exigirá nuevos recargos, ni gravámenes sobre el consumo del gas hasta 1914; que se rebajó el precio del gas para el alumbrado público y particular;

y para calefacción é industrias; que se suprimió el derecho de reversion de la fábrica y cañerías reconocido al Ayuntamiento en el contrato de 1864, pudiendo disponer libremente de todo ello la Compañía; y que ésta se obligó á satisfacer al Ayuntamiento las 75.000 pesetas anuales, de que se ha hecho mérito.

*
* * *

El nuevo contrato celebrado con la Compañía Madrileña de alumbrado y calefacción por gas, como todos los de su género, ofrece tres distintos aspectos: el técnico, el económico y el legal. El primero de ellos, relativo á la clase y calidad del gas, en fabricación, intensidad lumínica, aparatos para utilizarle, etc. El segundo, referente al precio del fluido y demás condiciones para el suministro del mismo á los consumidores. Y el tercero, en el que se comprende todo cuanto tenga relación con las formalidades y requisitos que han debido concurrir en el contrato, validez y eficacia del mismo, acciones, derechos y obligaciones que de aquél se derivan y Tribunales competentes para conocer de las reclamaciones que puedan promoverse entre las partes contratantes. El Letrado que suscribe nada puede, ni le incumbe decir respecto á los dos primeros puntos, por carecer de los conocimientos necesarios para informar sobre ellos con el debido acierto, como lo harán, si es preciso, los facultativos municipales peritos en la materia; y al discurrir acerca de las cuestiones legales que cabe suscitar en este caso, con arreglo á las disposiciones dictadas para los contratos que tienen por objeto realizar obras ó servicios provinciales ó municipales, surgen estas preguntas: ¿Puede el Excmo. Ayuntamiento rescindir actualmente, por su mera conveniencia, el expresado contrato? ¿Procede declararle lesivo? ¿Es válido, ó por el contrario, resulta nulo?

Para resolver estas cuestiones es preciso, ante todo, dejar bien determinada la naturaleza del referido contrato, ó sea definir si es de carácter civil ó administrativo, pues que de ello depende que le sean aplicables las disposiciones especiales que regulan los de esta última clase. La índole y objeto del que se celebró con la Compañía Madrileña no permiten abrigar duda alguna, á juicio del informante, sin que sobre

ello quepa la menor contradicción acerca del carácter esencialmente administrativo del aludido contrato.

Son los Ayuntamientos, según el art. 71 de la vigente ley Municipal de 2 de Octubre de 1877, Corporaciones económico-administrativas, y están encargados de ejercer aquellas funciones que por las leyes les competen, y por eso cuando contratan pueden hacerlo, bien como tales entidades administrativas, si es para realizar las funciones, desempeñar los servicios ó ejecutar las obras que les están encomendados como asuntos ó materias de su propia y exclusiva competencia, bien como personas jurídicas, capaces de derechos y obligaciones, que se rigen por el derecho civil en los demás casos.

Trátase aquí de un contrato celebrado para el servicio de alumbrado público, y ya por Real decreto de 16 de Septiembre de 1834, se ordenó por su art. 1.º que en todas las capitales de provincia había de establecerse, desde luego, el alumbrado nocturno y el servicio de serenos, disponiéndose en el art. 5.º que la Autoridad municipal formalizaría el correspondiente presupuesto y deliberaría sobre los medios ó arbitrios que, según las circunstancias de cada pueblo, se considerasen más á propósito para instalarlo y sostenerlo; y que formando el oportuno expediente se pasaría al Gobernador civil de la provincia, que lo remitiría con su informe al Ministerio de lo Interior para que sobre él recayera la Real resolución. Era, pues, el alumbrado público un servicio administrativo, de carácter obligatorio en las capitales de provincia, y la Autoridad municipal y sus superiores jerárquicos en aquel orden jurisdiccional entendían en todo lo relativo á la instalación y sostenimiento de aquél.

El art. 81 de la ley de Ayuntamientos de 8 de Enero de 1845, estableció que estas Corporaciones deliberarían, conformándose á las leyes y reglamentos, sobre las obras de utilidad pública que se costearan de los fondos del común y sobre las mejoras materiales de que fuera susceptible el pueblo. Y en Real orden de 9 de Febrero de 1858, se mandó prevenir á los Ayuntamientos que en lo sucesivo para todo contrato que tuviera por objeto el alcantarillado, empedrado y alumbrado público, conducción de aguas y obras ó servicios análogos, se instruyera el oportuno expediente y se sometiera á la autoridad del Gobernador, quien en vista de su importancia determinaría si había de sujetarse á la subasta pública ó autorizaría

que se ejecutara por administración. La ley Municipal de 20 de Agosto de 1870 en su art. 67 y la de 2 de Octubre de 1877 en su art. 72 al señalar las materias propias de la exclusiva competencia de los Ayuntamientos, comprendieron como una de ellas el alumbrado. Y, finalmente, las instrucciones de 26 de Abril de 1900 y 24 de Enero de 1905, para la celebración de los contratos provinciales y municipales, se ocupan especialmente como tales de los de limpieza y alumbrado.

No puede negarse ni desconocerse, en su virtud, que el contrato celebrado entre el Excmo. Ayuntamiento y la Compañía Madrileña para el servicio de alumbrado público es un contrato administrativo.

Nada había especialmente establecido para los de esta clase hasta que se publicó el Real decreto de 27 de Febrero de 1852 regulando los contratos que en lo sucesivo se celebrasen por cuenta del Estado, en cuyo Real decreto y por su art. 14 se ordenó que el Gobierno aplicaría las disposiciones del mismo por medio de reglamentos á los servicios y obras provinciales y municipales, sin más excepción que la de aquéllos que no llegasen á cinco mil reales en las provincias y á dos mil en los Ayuntamientos.

No se dictó, sin embargo, disposición alguna acerca de los indicados contratos, salvo la Real orden ya citada de 9 de Febrero de 1858, y haciendo caso omiso de los preceptos especiales contenidos en los artículos 80 y 85, respectivamente, de las leyes Municipales de 1870 y 1877 que no se refieren á obras y servicios, sino á los contratos sobre bienes inmuebles, derechos reales y títulos de la Deuda pública, hasta el Real decreto de 4 de Enero de 1883, el cual en su art. 1.º estableció que los contratos de los Ayuntamientos para obras y servicios, y, en general, los que hubieran de producir gasto ó ingreso en el presupuesto se celebraran por subasta.

Era de grandísima importancia el art. 29 del mismo Real decreto que facultaba á la Corporación contratante para rescindir el contrato, en cualquier tiempo de la duración del mismo, por mera conveniencia de aquélla. Y aquí se toca ya una de las cuestiones anteriormente apuntadas, cual es si, hallándose en vigor dicho Real decreto el año 1898 cuando se formalizó la novación del contrato con la Compañía Madrileña, podría hoy rescindirle el Excmo. Ayuntamiento por su mera conveniencia, en virtud de lo prevenido en el citado art. 29.

Cuestión es esta que no vacila el infrascrito en resolver negativamente. Ciertó es que al efectuarse el nuevo contrato estaba en vigor el Real decreto de 4 de Enero de 1883, que continuó rigiendo hasta que fué derogado por el de 26 de Abril de 1900, aprobando una nueva Instrucción para los servicios provinciales y municipales. Pero en este último se estableció por su art. 4.º que las incidencias á que dieran lugar los contratos ya celebrados se sujetarían á las disposiciones de la Instrucción que entonces se aprobaba; y esto mismo se estableció después por Real decreto de 24 de Enero de 1905, en el que se aprobó una nueva Instrucción y se derogó aquélla.

Si en la actualidad se tratara de rescindir el contrato, cualquiera que fuese la causa para ello, ya por faltar á su cumplimiento la Compañía Madrileña, ya por convenir así al Ayuntamiento, quedaría planteada una verdadera incidencia de aquél, ó sea del convenio concertado entre ambas entidades, y es evidente que para resolverla habría que sujetarse á las disposiciones de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, hoy vigente, porque así lo previene y ordena el art. 4.º de la misma.

Ahora bien; dicha Instrucción no faculta ni autoriza ya á las Corporaciones municipales para rescindir por su mera conveniencia los contratos que celebren para obras y servicios públicos. Y claro es, por tanto, que si á ella habrá de sujetarse la resolución que se adopte, no podrá el Ayuntamiento rescindir el contrato por aquel motivo, ó sea porque así le convenga, y si lo hiciera, es muy de temer, casi seguro, que su acuerdo no prevaleciese. Esto sin contar que en el caso contrario, y de conformidad con lo prevenido en el mencionado art. 29, la Compañía Madrileña tendrá derecho á reclamar indemnización de los perjuicios que la rescisión la irrogue, pues si tal precepto se halla vigente para acordarla, ha de estimarse que también lo está en cuanto reserva esta acción al rematante.

Es otro de los puntos estudiados por el Letrado informante, el relativo á la facultad del Ayuntamiento para declarar lesivo el contrato, con todas las consecuencias que de ello se derivan. Exige esto y requiere como base fundamental que la lesión exista, pues no basta que la Corporación municipal la declare, sino que es necesario que realmente la haya y que se compruebe y demuestre en cumplida forma, ya que el

acuerdo del Ayuntamiento no decide ni resuelve en definitiva sobre la rescisión por la expresada causa, sino el Tribunal competente de lo Contencioso administrativo, ante el que habría de formularse, en su caso, la correspondiente demanda por el Ministerio fiscal como representante de la Administración. Y si para que aquélla pudiera prosperar y obtener éxito favorable tendría que probarse que en efecto la lesión existe, forzoso es reconocer que ello ofrecería no poca dificultad después del informe emitido por los técnicos municipales antes de celebrarse el contrato y de las instancias dirigidas á la Alcaldía Presidencia por la Sociedad el Fomento de las Artes y por los industriales pertenecientes á varios gremios, de las que se ha hecho ya mención en este dictamen, sin olvidar tampoco que los términos de dicho convenio se estimaron benéficos para el Ayuntamiento y vecindario de esta Corte, declarándolo así en la Real orden dictada por el Ministerio de la Gobernación en 21 de Mayo de 1898.

Por otra parte, la facultad que tiene la Administración para declarar lesivos sus propios acuerdos no puede ejercitarse en todo tiempo, sino dentro del término legal á dicho efecto establecido, que es el de cuatro años, á contar desde que el acuerdo ó resolución se hubieren adoptado, pasados los cuales se tendrá por prescrita la acción administrativa con arreglo á lo dispuesto en el párrafo final del art. 7.º de la ley reformada de 22 de Junio de 1894, para el ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa, precepto aplicable al presente caso, de conformidad con lo dispuesto en el art. 15 del reglamento dictado para la ejecución de dicha ley, según el cual, las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos están comprendidos en los grados de la Administración á que se refiere el último párrafo del citado art. 7.º, agregando que los Ayuntamientos adoptarán su determinación en cuanto á la declaración de perjuicio, para los efectos de la reclamación contencioso administrativa, con los mismos requisitos que para entablar pleitos exige la ley Municipal.

Es, por lo tanto, indiscutible que los Ayuntamientos constituyen uno de los grados de la Administración para el efecto de declarar lesivos sus acuerdos, cuando estos envuelven perjuicio para sus intereses ó los del vecindario, pero esa facultad no pueden ejercitarla una vez transcurridos cuatro años, á contar desde que se adoptó el acuerdo lesivo, criterio éste que

ha sido confirmado por sentencia del Tribunal Supremo, pronunciada en 25 de Junio de 1907.

Y como quiera que han transcurrido ya más de cuatro años desde que en 1898 se acordó por el Excmo. Ayuntamiento y la Junta municipal de Asociados, la celebración del nuevo contrato con la Compañía Madrileña y se aprobaron las condiciones á que el mismo había de ajustarse, resulta prescrita la acción administrativa, y la Corporación municipal carece hoy de facultades y atribuciones para declarar lesivo aquel contrato; y si así lo hiciera, seguramente sería revocado por la superioridad el acuerdo que en tal sentido adoptase.

Otra de las cuestiones que á juicio del infrascrito pudieran suscitarse, es la relativa á la validez ó nulidad del nuevo contrato celebrado con la Compañía Madrileña de alumbrado y calefacción por gas.

Estaba en vigor el formalizado el año 1864 por un período de cincuenta años que terminaba el 21 de Junio de 1914, cuando se acordó y aprobó en 1898 la novación de aquél, ó lo que es igual, la celebración de otro nuevo contrato; pues esto y no otra cosa significa y quiere decir en derecho la novación de un contrato anteriormente subsistente, cuando se modifican las cláusulas y condiciones de este y no se limita aquélla á la substitución de las personas ó entidades que por el mismo adquirieron derechos ó quedaron obligadas. La novación de que ahora se trata, no consistió en subrogar ó substituir las personas jurídicas contratantes, las cuales siguieron siendo las mismas, sino en alterar y modificar varias de las condiciones principales y más importantes del contrato que estaba en vigor, como puede observarse en la relación de los antecedentes expuestos en este dictamen.

Dedúcese de aquí que la tal novación, ó sea el nuevo contrato para el servicio público de alumbrado, tenía que celebrarse con las formalidades y requisitos entonces exigidos por las disposiciones legales para todos los de obras y servicios municipales, en sentir del informante, cuya opinión sobre este punto tiene en su apoyo la jurisprudencia establecida en diferentes sentencias que luego se citarán.

Cuando se celebró el último contrato con la Compañía Madrileña en 1898 se hallaba en vigor el Real decreto de 4 de Enero de 1883, el cual en su art. 1.º disponía que los contratos de los Ayuntamientos para servicios y obras municipa-

les, y, en general, los que hayan de producir gasto ó ingreso en el presupuesto se celebrarían por subasta, quedando tan sólo exceptuados de este requisito y formalidad los que expresamente se determinaron en el art. 36 de aquel Real decreto, y siendo precisa la declaración previa de dicha excepción, hecha por el Gobernador de la provincia, salvo el caso de que el ingreso ó gasto que el contrato ocasionara no excediese de dos mil pesetas para los Ayuntamientos, capitales de provincia, y de quinientas para los demás.

Era, pues, de absoluta é imprescindible necesidad la celebración de subasta, de tal modo que *sin ella no sería válido el contrato que se celebrase* según terminantemente se estableció en el art. 37 del mismo Real decreto; y como no aparece de los antecedentes remitidos al Letrado firmante que el contrato celebrado con la Compañía Madrileña estuviera comprendido en ninguno de los casos de excepción determinados en el artículo 36, ni tampoco que previamente se hiciera por el Sr. Gobernador civil la declaración exigida por el art. 37, es incuestionable que no pudo prescindirse de la formalidad de la subasta.

Se omitió, no obstante, este importantísimo y esencial requisito, y tal infracción de lo prevenido en el art. 1.º del mencionado Real decreto entonces vigente, implica por modo necesario la nulidad de aquel contrato, según el precepto claro y preciso del art. 37, ya citado, y con arreglo además á lo estatuido en el art. 4.º del Código civil.

Así se declaró en sentencia de 21 de Junio de 1905 con referencia á un contrato celebrado sin subasta, declarando que cuando ésta es necesaria por razón de la cantidad, si se prescinde de tal requisito, el contrato es nulo, conforme al art. 4.º del Código civil. En otra sentencia de 8 de Enero de 1896 referente al contrato celebrado entre el Ayuntamiento de Palma de Mallorca y la Empresa del alumbrado por gas en aquella ciudad, se declaró que por haberse modificado algunas de las condiciones del primitivo convenio al prorrogarse en 1887, es notorio que esta prórroga constituía una novación de contrato, y como quiera que la adjudicación no se sujetó á la formalidad del remate, previa subasta pública, quedó infringido el artículo 1.º del Real decreto de 4 de Enero de 1883.

Se dictó otra sentencia en 28 de Septiembre de 1895, muy interesante por cierto en este caso, por ser análogo ó mejor

aun idéntico al que motiva este dictamen. El Ayuntamiento de Zaragoza había celebrado con la Compañía Credit Lyonnais en 1864, un contrato para el alumbrado por gas de la ciudad, y en 22 de Julio de 1892 aquella Corporación municipal aprobó ciertas bases que modificaban en parte el primitivo contrato, el cual se confirmó en todo lo no modificado por aquéllas; y sometido el asunto al Tribunal central de lo Contencioso Administrativo, estimó que la referida novación del contrato era nula, dictando la expresada sentencia que contiene estos fundamentos legales: Considerando, que los acuerdos tomados por el Ayuntamiento de Zaragoza en 22 y 28 de Julio de 1892, aprobando las nuevas bases que debían sustituir la condición número 24 de la escritura de 28 de Octubre de 1864 otorgada para el alumbrado público por gas de aquella ciudad, constituyen una verdadera novación en el contrato con tal fin celebrado, ya porque la base cuarta claramente lo consigna, ya porque se concede á la Empresa la exclusiva que no tenía para el servicio hasta el año 1900, ya también porque reservada en la escritura citada la facultad de alterar el sistema de alumbrado por otro más beneficioso después de un plazo que ha transcurrido, abdica el Ayuntamiento en las bases de este plazo sin justificado motivo, y, por lo tanto, como se ha alterado el estado de derecho existente entre el Municipio y la Empresa del gas, resulta demostrado que para que fuera válida esta alteración ó novación del contrato necesitaba atemperarse á las reglas establecidas por el Real decreto de 4 de Enero de 1883 para contratos municipales: Considerando, que la más estricta observancia de los preceptos de situialidad establecidos para la validez de las obligaciones que los Ayuntamientos se imponen, constituye la defensa de los intereses colectivos, puestos al cuidado de estas Corporaciones, y en su virtud, la resolución del Gobernador dejando sin efecto los acuerdos del Ayuntamiento, era procedente, puesto que, según reconoce el mismo, observó lo prescripto en el Real decreto citado, sin que exista causa alguna de excepción que pudiese motivar su inobservancia con arreglo al mismo Real decreto.

Queda con esto demostrado que la novación del contrato con la Compañía Madrileña, formalizada por escritura pública el año 1898, adolece de un vicio de nulidad, por haberse prescindido del necesario requisito de la subasta, sin que se ob-

tuviera la previa excepción de este trámite. Mas estima de su deber el Letrado que suscribe y séale lícito advertir que antes de adoptar un acuerdo en tal sentido y de tanta gravedad y trascendencia, ha de procederse con el más exquisito tacto y con la mayor cautela y discreción, examinando muy detenidamente el asunto y las ventajas ó inconvenientes que pueda ofrecer para el Ayuntamiento ó el vecindario, porque toda previsión será poca para medir y calcular las consecuencias que de ello podrán derivarse, ya en el orden económico, ya bajo el punto de vista legal, pues no es aventurado suponer que la Compañía contratante quizás exija á la Corporación municipal el abono de las bonificaciones concedidas en el precio del alumbrado público por el contrato, de 1898, el reintegro de las cantidades que ha pagado por la cuota anual que viene satisfaciendo con arreglo á la condición 69.^a y la consiguiente indemnización de perjuicios por la rebaja que, á cambio de otras compensaciones se hizo por la misma en el precio del fluido para el servicio particular, conceptos todos ellos que han de importar cantidades respetables; y las demás reclamaciones que acaso podrá formular y que no es dado señalar de antemano.

Por lo que al procedimiento se refiere, ha de tenerse en cuenta que, tratándose de un contrato administrativo, las cuestiones que se promuevan acerca del mismo, han de plantearse y decidirse primeramente en la vía gubernativa, y luego que esta haya sido apurada, podrá acudir á la vía contencioso-administrativa la parte que se considere perjudicada en sus derechos por la resolución que en aquella se dictare.

El Real decreto de 27 de Febrero de 1852 regulando los contratos que celebra el Estado, y cuyas disposiciones según su art. 14, habrían de aplicarse á los contratos provinciales y municipales por medio de los oportunos reglamentos, estableció en su art. 12, que ningún contrato celebrado con la Administración, podrá someterse á juicio arbitral, resolviéndose cuantas cuestiones se susciten sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos por la vía contencioso-administrativa que señalan las leyes. Y el Real decreto de 4 de Enero de 1883 dictando reglas para los contratos provinciales y municipales sobre servicios y obras, compras, etc., ordenó en su artículo 28 que el conocimiento de las cuestiones que se suscitaren entre la Corporación interesada y el rematante referen-

tes al cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos de los contratos, sobre nulidad de los mismos ó sobre indemnización de perjuicios, correspondería á los Tribunales de primera instancia de la jurisdicción competente, para conocer de estas cuestiones en los contratos celebrados por la Administración del Estado. Y exigió como requisito necesario á toda demanda, que la había de preceder reclamación en la vía gubernativa, en la cual causaríá estado el acuerdo de la Corporación contratante, fuera de los casos expresamente exceptuados en aquel Real decreto.

Estas disposiciones han venido á ser confirmadas por el artículo 31 de la Instrucción de 26 de Abril de 1900, que señaló como Tribunales competentes para conocer de tales cuestiones los de la jurisdicción contencioso-administrativa. Y asimismo ha ratificado dichas disposiciones la Instrucción, hoy vigente, para los contratos provinciales y municipales de 24 de Enero de 1905, en su art. 32, cuyo texto literal en sus párrafos primero y segundo, es como sigue: «Incumbe al Tribunal correspondiente de la jurisdicción contencioso-administrativa, después de apurada la vía gubernativa, el conocimiento de las cuestiones que se susciten acerca del cumplimiento ó incumplimiento de los preceptos de esta Instrucción, exceptuando los taxativamente expresados en la misma. También le incumbe, previo el requisito de estar apurada la vía gubernativa, el de las cuestiones que versen *acerca de los contratos ya realizados*, bien con motivo de cuanto se refiere á sus cláusulas, bien cuando se trate *de la rescisión y nulidad de los mismos*». En el citado art. 32 se previene también que ningún contrato celebrado por las Corporaciones provinciales ó municipales podrán someterse á juicio arbitral, ni á otra jurisdicción que la competente en cada caso con arreglo á las leyes. Y ordenó igualmente que los acuerdos de los Ayuntamientos en la materia serán apelables ante los Gobernadores de provincia en el plazo fijado por la ley Municipal.

Los preceptos legales que se acaban de mencionar indican por modo claro el procedimiento que ha de seguirse en el caso de que la Corporación municipal, después del muy detenido examen que el asunto requiere por su extraordinaria importancia, decidiese acordar la nulidad del contrato celebrado con la Compañía Madrileña de alumbrado y calefacción por gas, no sin insistir el Letrado informante en que deben medi-

tarse mucho las consecuencias que de ello pudieran derivarse para el Excmo. Ayuntamiento.

No son las ya apuntadas las únicas cuestiones que ofrece el referido contrato, pues hay otra de especial interés referente al derecho de ocupar el subsuelo de la vía pública con las cañerías de conducción del gas, concedido á la Compañía Madrileña por las condiciones 2.^a, 3.^a y 66.^a, no sólo durante el tiempo del contrato, sino después de terminado éste, mientras continúe explotando la industria, sin más gravamen municipal que el canon fijo de 10.000 pesetas anuales.

Interpretadas al pie de la letra las indicadas condiciones parece que se ha otorgado á la Compañía un derecho de ocupación del subsuelo de la vía pública por todo el tiempo que le plazca utilizarle, sin que el Ayuntamiento pueda ponerle jamás limitación alguna contra la voluntad de aquélla, y no hay para que decir cuan absurdo sería pensarlo y sostenerlo así, porque los Ayuntamientos meros administradores de los bienes de los pueblos, tienen como uno de sus principales deberes, según la regla tercera del art. 72 de la ley Municipal, el de conservar todos los bienes y derechos pertenecientes al Municipio, y no pueden hacer en ningún caso concesiones de esa naturaleza á perpetuidad ó por el tiempo ilimitado en que al concesionario le convenga ó quiera utilizarlas, y menos aún cuando por el lapso del tiempo han de adquirir mayor importancia y valor sin que sea dado calcular hasta donde llegará éste en el transcurso de los años, como sucede con el derecho de ocupación del subsuelo de las vías públicas que, por el creciente y constante desarrollo de la capital, han de ocupar cada vez mayor extensión de terreno. No ya los Ayuntamientos, sino el Estado mismo, no puede hacer concesiones en esa forma ilimitada, y en la ley de Ferrocarriles se fija el plazo de sesenta años para los tranvías y el de noventa y nueve para aquéllos, el mismo que también se establece en la ley de Obras públicas para las concesiones de esta clase. Sería, por lo tanto, en todo caso inadmisibile la interpretación de las citadas cláusulas del contrato, en el sentido de que la Compañía tiene adquirido y se le ha otorgado el derecho de ocupar el subsuelo de la vía pública por tiempo ilimitado, y le conservará siempre, sean cualesquiera los años que transcurran y el desarrollo que tenga el perímetro urbano de Madrid, ínterin la Compañía Madrileña quiera seguir aprove-

chando ese derecho por no convenirla ó no tener á bien cesar en la explotación de la industria.

Es preciso reconocer que ese derecho ha de tener forzosamente un límite que no dependa de la exclusiva voluntad de la Compañía y no rebase las facultades que por las leyes tenga el Ayuntamiento para concederle, porque de suponerle ilegal no tendrá valor ni eficacia alguna. Discurriendo sobre esta base obligada, hay que establecer la calificación jurídica de la expresada concesión para determinar los efectos de la misma; y al discurrir sobre esto resulta patente y notoria la inexactitud con que hubo de llamarse servidumbre al referido derecho, que no tiene, ni mucho menos, tal carácter, y que en el caso de tenerle, sería nulo y estaría ilegalmente establecido, porque constituiría un derecho real sobre bienes inmuebles, que de ningún modo hubiera podido imponerse ni subsistir válidamente sin que se cumplieran los requisitos exigidos por la regla tercera del art. 85 de la ley Municipal, que no se observaron, y que ya se estimó no eran necesarios en la Real orden que, por virtud de la alta inspección, dictó en 21 de Mayo de 1898 el Ministerio de la Gobernación, declarando no ser aplicable al contrato aquel precepto legal.

No es una servidumbre, aunque con evidente error se le llamó así, el derecho á que el infrascrito se viene refiriendo, y si lo fuera, ya se ha dicho no podría prevalecer ni tendría valor alguno, por la razón que se acaba de indicar, y por ello fuerza es reconocer que ó carece en absoluto de toda eficacia, ó no es tal derecho real de servidumbre. No es tampoco una hipoteca, ni un censo, que á nadie se ha ocurrido llamarlo así ni sería posible sostener semejantes supuestos, ni es, en fin, una venta, pues notorio resulta que no concurren ninguna de las circunstancias esenciales por las cuales se determina la existencia de estos contratos.

Es jurisprudencia repetida del Tribunal Supremo que los actos y contratos no se califican ni definen legalmente por el nombre que les hayan dado las partes contratantes, sino por el que en realidad les corresponda en el orden jurídico, con arreglo á sus términos y á las estipulaciones que contengan. Y bien examinados los de las condiciones relativas al derecho á ocupar el subsuelo de la vía pública mediante el pago de un canon fijo anual, es de ver que esta concesión sólo implica la facultad otorgada á la Compañía de utilizar y aprovechar una

cosa ajena por un precio al efecto estipulado, lo cual no es ni puede ser otra cosa que un contrato de arrendamiento por tiempo indefinido, dehiendo entenderse por ello que es anual dicho contrato, ó sea que vence por años, ya que en esta forma se estipuló el precio del arriendo.

No es el Letrado informante el primero que atribuye la calificación jurídica de arrendamiento á la indicada concesión otorgada para ocupar el subsuelo de la vía pública con las cañerías destinadas á conducir el gas, porque ya en la condición 11.^a del contrato celebrado el año 1864, refiriéndose á igual derecho reconocido á la Compañía explotadora en el anteriormente celebrado en 1849, se le llamó *locación*, ó sea arriendo, sin que se explique la causa ó motivo de que luego se le haya dado impropriamente el nombre de servidumbre, sin haber sufrido modificación alguna en su esencia, naturaleza y objeto, á ese mismo derecho. De todas maneras se ofrecerá siempre esta disyuntiva: ó constituye la tal concesión un arrendamiento por cierto precio anual y tiempo indefinido, en cuyo caso se entenderá hecho el contrato por años, con arreglo al articulo 1.581 del Código civil, á partir desde la fecha en que termina el del servicio para el alumbrado público; ó es una servidumbre, como se le llama en el pliego de condiciones, y, por consiguiente, un derecho real establecido sobre cosa ajena, que en este caso es la propiedad inmueble de la pertenencia del Ayuntamiento, y bajo semejante supuesto resultaría aquélla indebidamente constituida y sería nula por no haberse observado los trámites y formalidades que exige la regla tercera del art. 85 de la ley Municipal, para los contratos relativos á los bienes inmuebles del Municipio y derechos reales.

Existe, por último, otra cuestión pendiente y que aun no se ha dilucidado, acerca de la propiedad de una parte de los terrenos que ocupan la fábrica del gas y sus dependencias. Ya se ha dicho que el Ayuntamiento, en escritura otorgada el 29 de Mayo de 1846, ante el Escribano D. Manuel María de Paz, cedió á los Sres. Partington y Oliver Mamby, causantes de los que luego se han venido sucediendo como contratistas para el servicio de alumbrado público, una tierra que la Corporación municipal adquirió de D. Manuel Regidor, con la cabida de cinco fanegas, ocho celemines y diez y seis estadales, cuya cesión se hizo para que en aquel inmueble se construyera la fábrica del gas, reservándose, sin embargo, Madrid

la propiedad de la referida tierra. La Compañía explotadora del servicio parece ha efectuado luego nuevas adquisiciones de terrenos, pero á pesar de esto se ha supuesto que se halla en posesión de una mayor superficie perteneciente á los propios de la Villa, habiéndose promovido con este motivo un expediente en virtud de denuncia formulada por el Investigador principal de Propiedades y derechos del Estado en la provincia, por el interés que éste pudiera tener á virtud de lo dispuesto en las leyes desamortizadoras.

En aquel expediente, que tuvo comienzo en el año 1862, hubieron de practicarse multitud de diligencias, hasta que en 27 de Febrero de 1885 émitió informe el Abogado del Estado que no estimó probada la denuncia y propuso otras nuevas diligencias, que aún no se han efectuado, encaminadas á demostrar si existe ó no la detentación que se supone. Lo cierto es que hasta la fecha no se ha esclarecido aún debidamente si la Compañía Madrileña de alumbrado y calefacción por gas detenta algún terreno que no sea de su pertenencia, lo que sólo podrá comprobarse practicando las necesarias operaciones periciales con vista de los títulos y documentos que obren en las dependencias municipales y de los que exhiba la Compañía ó presenten cualesquiera otras personas interesadas, sin olvidar que en el caso de hallarse aquélla en posesión de terrenos que no la pertenezcan, será preciso además que el Ayuntamiento acredite su mejor derecho sobre ellos para formular con éxito las consiguientes reclamaciones.

Por todo lo expuesto, el Letrado que suscribe, opina:

Primero. Que el Excmo. Ayuntamiento no puede declarar rescindido por su mera conveniencia el contrato celebrado en 1898 con la Compañía de alumbrado y calefacción por gas, porque si bien se formalizó bajo el régimen del Real decreto de 4 de Enero de 1883 que en su art. 29 concedía esta facultad á la Corporación contratante, no reconoce ya á ésta ni le otorga tal derecho la Instrucción hoy vigente de 24 de Enero de 1905 para los contratos provinciales y municipales, cuyas disposiciones son aplicables á las incidencias de los celebrados con anterioridad, y, por tanto, á la rescisión de los mismos, con arreglo á lo establecido en el art. 4.º del Real decreto de la última fecha citada por el que se aprobó la referida Instrucción.

Segundo. Que tampoco procede declarar lesivo el mencio-

nado contrato, porque, á parte de que esta declaración no sería definitiva hasta tanto que la confirmara el Tribunal competente de lo Contencioso-Administrativo una vez practicada la prueba de la supuesta lesión, ha quedado ya prescripta la acción administrativa, por haber transcurrido con mucho exceso el plazo de cuatro años que para ese efecto concede el último párrafo del art. 7.º de la ley y reformada para el ejercicio de la jurisdicción contencioso-administrativa, en relación con el artículo 15 del reglamento dictado para su ejecución.

Tercero. Que habiéndose celebrado el referido contrato de 1898 sin la formalidad de subasta y sin obtener previamente la excepción de este requisito, adolece aquél de vicio de nulidad; más para declararla, en su caso, debe procederse con exquisita prudencia, porque toda previsión será poca para calcular las graves consecuencias que de ello pueden derivarse por las reclamaciones que quizás formule la Compañía sobre abono de las cantidades que ha dejado de percibir por la rebaja en el precio del flúido para el alumbrado público, el reintegro de las que haya satisfecho por la cantidad de las 75.000 pesetas anuales que ha debido pagar al Ayuntamiento, según la condición 69 del contrato, y la indemnización consiguiente por las rebajas que hizo en el precio del gas para el servicio particular, á cambio de otras compensaciones que se la hicieron y de las que se vería privada, á reserva de las demás acciones que la Empresa ejercitase y que de antemano no es posible señalar.

Cuarto. Que el derecho reconocido á favor de la Compañía en las condiciones 2.ª, 3.ª y 66.ª, del contrato para ocupar con sus cañerías el subsuelo de la vía pública durante el contrato y después de terminado éste, mediante cierto precio anual, constituye un contrato de arrendamiento por tiempo indefinido que el Ayuntamiento podrá dar por vencido todos los años, una vez expirado el del servicio para el alumbrado público; y que en todo caso será también nulo, ya se considere como tal arriendo, por haberse efectuado sin los requisitos exigidos por el Real decreto de 4 de Enero de 1883, vigente cuando aquél se celebró, ya se considere como un derecho real de servidumbre, por no haberse observado las formalidades exigidas por la regla 3.ª del art. 85 de la ley Municipal.

Quinto. Que respecto á los terrenos que se supone detenta la Compañía citada, es necesario esclarecer debidamente por

medio de las oportunas operaciones periciales si existe ó no la indicada detentación, y caso afirmativo si es de la pertenencia de la Villa la superficie que la Empresa del gas pueda poseer indebidamente.

Tal es el dictamen del Letrado que suscribe; sin embargo, la Comisión acordará lo que estime más acertado y procedente para formular la debida propuesta al Excmo. Ayuntamiento.

Madrid 2 de Junio de 1910.

Letrado, Gregorio Campuzano.

F
6589

BIBLIOTECA HISTORICA MUNICIPAL



1200077726

